

Elementos para el análisis y la investigación del proceso político chileno, 1970-1973 *

MARCO ANDRÉS GAMERO

Introducción

A mediados de 1971, un connotado político chileno de la oposición al Gobierno de Allende, recorre los Estados Unidos de Norteamérica señalando a los dirigentes de ese país que debe excluirse la alternativa de una intervención directa en Chile y dejar más bien que se desarrollen las condiciones internas que permitan el derrocamiento de la Unidad Popular, para lo cual EE. UU. debe limitarse a accionar ciertas palancas como el crédito y el problema del cobre. Del resto se encargaría la propia oposición chilena. De esta manera, se concertaba lo que Allende llamaría “el bloque invisible”; pero, más significativo aún, se hacía explícita la nueva estrategia de los EU respecto a ciertos procesos nacionales en América Latina que amenazan con la transformación del *statu quo* en el continente.

Si he hecho alusión a esta anécdota al inicio de mi exposición es para dejar claro desde un comienzo el carácter de mi análisis del proceso político chileno entre 1970 y 1973, en el marco de un Seminario que se consagra al estudio de la Dependencia y el Poder Político.

En efecto, un énfasis peligroso, a mi juicio, en los estudios de la dependencia ha sido el análisis de los condicionamientos externos de los procesos sociales nacionales, descuidando parcialmente el tratamiento interno de tales procesos. El caso de Chile permite corregir este énfasis y obliga a un análisis mucho más acucioso del conjunto de variables y problemas que determinan internamente el curso del proceso político.

* Trabajo presentado al Seminario de Sociología del Desarrollo, Dependencia y Poder Político, realizado en Berlín en noviembre de 1973 y organizado por la Fundación Alemana para el Desarrollo, el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina y la Comisión de Estudios de la Dependencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

No se trata de una opción caprichosa. Ella obedece al carácter mismo de la dependencia chilena. Hay en ella dos aspectos que deben ser distinguidos cuidadosamente. El primero se refiere a la dependencia de tipo más tradicional y directa provocada por la apropiación norteamericana de la mayor riqueza del país, el cobre. El segundo, y evidentemente vinculado al anterior, se refiere a la inserción de todo el sistema social chileno en el sistema capitalista mundial cuyo centro hegemónico es Estados Unidos. El primer aspecto determina un tipo de política de intervención directa como la que ha existido, por ejemplo, en algunos países centroamericanos. El segundo obliga a una política más sofisticada que necesita tomar en cuenta una multiplicidad de factores, entre ellos, las situaciones de política interna de los países. Nuestra hipótesis central es que si bien en Chile se da durante estos años el aspecto de intervención directa, cuyo episodio más dramático es el caso de la ITT por todos conocido, su espectacularidad no anula el hecho que tales intentos fracasaron y estaban necesariamente condenados al fracaso, y que asistimos al desarrollo de una estrategia imperialista que toma en cuenta seriamente que la dependencia es un fenómeno que constituye un marco en el cual se desarrollan dialécticamente procesos sociales con cierta autonomía. La nueva estrategia del centro hegemónico en casos como el chileno se basa menos en el uso de la intervención directa como en el aprovechamiento y fomento de las condiciones internas que permitirán el derrocamiento del gobierno de Allende, recurriendo sólo a la manipulación de elementos tales como el crédito y el problema del cobre, y a la asesoría necesaria en el momento preciso. A nuestro juicio, el tipo de intervención norteamericana en la economía chilena, las condiciones especiales de la política internacional y las complejas condiciones de política interna chilena condenaban de antemano al fracaso los intentos de intervención tipo Santo Domingo. En el caso chileno, no es que no haya intervención imperialista en el proceso político. Pero ella, fuera de casos como el de la ITT señalados, se basa mucho más en la conciencia de la autonomía propia de la periferia en la situación de dependencia.

Si la hipótesis anterior es válida, cualquier análisis de lo ocurrido en Chile durante los últimos años debe dar especial relevancia a las variables internas del proceso, las que no pueden entenderse determinadas mecánicamente por la situación de dependencia, sino relacionadas a ella pero dotadas de fuerte autonomía. Nuestro análisis, por lo tanto, se limitará al proceso sociopolítico chileno, a destacar los puntos relevantes del proceso "desde dentro" y si no hay una referencia explícita y continua al problema de la dependencia ni a la intervención imperialista, ello

queda aclarado de alguna manera por el hecho de asumir esta hipótesis de trabajo.

Antes de entrar de lleno en nuestro tema es imprescindible señalar ciertas restricciones. Lo que trataré de hacer es una síntesis personal de aquellos elementos —gran parte de los cuales han sido analizados y desarrollados por diversos autores en múltiples trabajos¹— que considero deben estar en cualquier debate sobre el llamado “caso chileno”. No se trata ni siquiera de una interpretación global ni de un análisis de causas de lo ocurrido en Chile. Tan sólo me interesa ordenar algunos problemas y resaltar algunos elementos que creo debieran ser tomados en cuenta en discusiones e investigaciones futuras con más pretensiones que mi presentación. A sólo dos meses del derrocamiento del Gobierno Popular, me parece muy difícil una evaluación global del proceso por parte de quienes estuvimos de alguna manera comprometidos en él. Tan sólo aspiramos a ordenar algunos puntos e ideas al respecto, tratando de evitar juicios que ya se conocen o reiteraciones de profetas del pasado que frente a lo ocurrido recuerdan permanentemente que ellos “ya lo habían advertido”. Tampoco se trata de hacer una descripción detallada fase por fase del proceso político chileno de los últimos tres años, sino solamente de rescatar los puntos que creo esenciales. Si a la naturaleza de una exposición como esta que intentaré se añaden mis serias limitaciones personales de trabajo y reflexión en los últimos meses, se comprenderá por qué lo que aquí diremos no tiene pretensión alguna de originalidad y ofrece serias desigualdades en el tratamiento de los diversos puntos.

Con estas aclaraciones entramos en materia. Ordenaré mis reflexiones en torno a siete puntos que propongo como esquema o guía para la investigación y el análisis y no como sistema cerrado de explicación e interpretación.

I. *El contexto latinoamericano*

El primer punto que quiero rescatar es el de la inserción del proceso político chileno en el contexto de la problemática latinoamericana de los últimos años.

Uno de los mitos recurrentes entre analistas y políticos al referirnos a Chile es el de la absoluta originalidad de la situación chilena y su casi ninguna referencia al conjunto de la problemática latinoamericana. Incluso podríamos afirmar que los rasgos propios del proceso desencadenado por la Unidad Popular, tendieron a enfatizar esta “deslatinoamericanización” del caso chileno.

No se trata aquí de caer en el mito contrario de explicar toda la situación chilena aludiendo a una vaga explicación global a partir de la situación latinoamericana, sino más bien de entender las raíces históricas comunes que hacen, a nuestro juicio, inteligible el tipo de intento iniciado en Chile en 1970.

Dos son los rasgos más significativos que caracterizan la "problemática latinoamericana" de la década del 60, a juicio de muchos autores, y ellos están presentes indudablemente en el inicio de la llamada "experiencia chilena". Ambos rasgos configuran lo que se ha denominado la doble crisis de la sociedad latinoamericana.

El primer rasgo apunta a la frustración de las expectativas del desarrollo latinoamericano generadas a comienzo de la década. En efecto, por aquella época se hace dominante una visión que concibe la probabilidad alta o la seguridad, variando las opiniones en el grado de esta probabilidad, de un desarrollo capaz de incorporar a las zonas y masas hasta ese entonces marginadas del continente a los bienes y servicios propios de la civilización moderna, de extender la participación de las grandes masas en el proceso de toma de decisiones y de acrecentar la autonomía nacional en relación al centro hegemónico constituido por los EU. Estas son las metas establecidas por lo que se llamó el proyecto reformista o desarrollista, cuya dirección se entregaba a los denominados "nuevos sectores medios", constituidos, según los casos, por "elementos progresistas" de la burocracia civil o militar o de un nuevo tipo de burguesía. Tales sectores se suponía eran capaces de establecer alianzas con las vastas capas populares "marginalizadas" y de hacer pagar a oligarquías tradicionales un precio necesario para obtener un desarrollo "nacional e integrado".

No cabe aquí un análisis detallado del desarrollo del proyecto reformista. Pero en término de sus propias metas, el fin de la década establece la frustración de las expectativas generadas en torno a él. En vez de la extensión de los "frutos del desarrollo" a cada vez más amplias capas de la población se consolida el llamado "modelo excluyente y concentrador" del desarrollo, las perspectivas democráticas ceden paso a regímenes de corte autoritario y represivo y se estructuran nuevas formas de dependencia que hacen ilusa la autonomía de las decisiones frente a la irrupción en la escena de las grandes corporaciones transnacionales. El desarrollo latinoamericano ve agotarse un modelo en el que cifró grandes esperanzas y empieza a hacerse dominante la visión de la "inviabilidad del desarrollo capitalista", aun cuando este problema resurja en los próximos años como tema de discusión y revisión.

El segundo rasgo apunta a la crisis del movimiento revolucionario en

el continente. La década del 60 en su inicio está dominada por el impacto de la Revolución cubana, a partir de la cual se generan grandes expectativas sobre la "inminencia" de la revolución en el continente. Un debate amplio y profundo sacude a las fuerzas de izquierda en torno al carácter y estrategia de la revolución nacional y continental. Al optimismo de los primeros años que siguen a la Revolución cubana, le suceden las divisiones profundas del movimiento revolucionario, los fracasos parciales de los movimientos insurreccionales y las dificultades de asumir estas divisiones y estos fracasos en un modelo estratégico coherente que sea capaz de hacer frente a las nuevas transformaciones del poder político en el continente y de suscitar un gran movimiento de masas en el que se establezcan las alianzas necesarias en torno a los trabajadores de la ciudad y del campo. A nuestro juicio el trasfondo de la crisis de la salida revolucionaria lo constituye un problema no solucionado por la práctica revolucionaria de estos años, cual es la relación adecuada y eficaz de los grupos políticos organizados que actúan como vanguardias crecientemente radicalizadas con las grandes masas populares.

Lo dicho hasta aquí no ofrece mayor novedad y su fundamentación y matización adecuadas están fuera de los fines de esta exposición. Lo que nos interesa resaltar es que estos dos rasgos salientes de la situación latinoamericana de fines de la década del 60 tienen su expresión en la situación chilena y la configuran en gran parte. Nuestra posición al respecto es que el proceso social y político iniciado en Chile en 1970 debe entenderse como una respuesta, de acuerdo a las características particulares de la sociedad chilena, a esta situación generalizada en el continente. Es a ambos rasgos, a ambos aspectos de la doble crisis —la crisis del modelo reformista que debe ser interpretada como crisis del desarrollo capitalista y, por lo tanto, como necesidad de un nuevo modelo de desarrollo y la crisis de la salida revolucionaria que debe ser interpretada como la falta de un adecuado proyecto de transformación de las bases de la sociedad de explotación, que vincule vanguardias políticas y masas populares— es a estos rasgos, que el proceso iniciado en Chile en 1970 busca dar una respuesta. De ahí su verdadera y profunda significación para todo el continente.

II. *Los condicionantes particulares del caso chileno*

Abordamos así el segundo punto que quisiera destacar: el de las condicionantes particulares del proceso político chileno dentro del marco descrito.

En efecto, el esquema de desarrollo capitalista chileno que conoce una

modalidad de tipo populista a partir de 1925 parece agotarse en el experimento reformista de la Democracia Cristiana entre 1964 y 1970. No debe olvidarse que no se trató de una de las experiencias reformistas de mayor significación en América Latina, contando con las mejores condiciones internacionales y los mejores recursos para su éxito. Deslegitimada la condición oligárquica, el proyecto demócrata cristiano aparecía como, esencialmente, un proyecto modernizante en que nuevos sectores de la burguesía establecían una red de alianzas con algunos sectores medios y con las capas marginales de la población campesina y urbana. Sin embargo, en 1970, este proyecto acusa su fracaso a través de los mismos indicadores que hemos señalado para la situación de todo el continente. Por un lado, se acrecientan y agudizan los niveles de dependencia,² por otro, se acentúan los rasgos monopólicos de la economía con una cada vez mayor concentración de los "frutos del desarrollo" en sectores muy restringidos³ y, finalmente, los últimos años ven aparecer un conjunto de actos represivos a los sectores populares con masacres de grandes repercusiones políticas que revelan el surgimiento de nuevas formas autoritarias y represivas del sistema político. Junto a ello, un conjunto de otros factores e indicadores de diversa índole⁴ configuran el fracaso del proyecto reformista de modernización y, a través de él, del esquema de desarrollo capitalista. La alternativa reformista queda cancelada precisamente a raíz de esta experiencia demócrata cristiana. Ello se expresa también en la pérdida de legitimidad del proyecto capitalista evidenciada en las elecciones de 1970 donde dos tercios de la población se inclinan, con grados y formas diferentes, por un abandono del esquema capitalista de desarrollo. Sin embargo, el proceso reformista tuvo la capacidad de dividir en torno a él a las diversas fracciones de la burguesía; esta división se expresó en el plano político formal con la quiebra de la alianza de 1964. La importancia de la quiebra temporal de esta alianza a raíz de la experiencia reformista y cuyas raíces no cabe analizar aquí, es que ella permite, en tanto subsiste, la viabilidad de un proyecto político de transformaciones sustanciales de la sociedad dentro de los marcos del sistema político formal.

En lo que se refiere a la crisis del movimiento revolucionario a la que hemos aludido como segundo rasgo de la situación latinoamericana al finalizar la década del 60, el caso chileno presenta también algunas particularidades. El rasgo más característico en la relación entre las vanguardias y organizaciones políticas y las masas populares, nos parece ser la legitimidad que en Chile han tenido los partidos como canalizadores del movimiento de masas y la relativa transferencia de la relación partidos y movimiento social. Dicha transferencia se había reducido en últi-

mas fechas principalmente para los partidos de la burguesía pero mantenía su plena vigencia en lo que se refiere a los partidos populares. Este hecho central, a nuestro juicio, se explica, en parte, por las características propias del Estado y de la institucionalidad chilenas a las que nos referiremos brevemente más adelante, pero también y en relación a ellas, por el tipo de lucha que los movimientos populares habían entablado durante casi todo este siglo. De modo que una unión sólida entre los partidos representativos de diversos sectores del proletariado y otros sectores populares, era garantía y reflejo necesario de la construcción de un gran movimiento de masas.

Pero para que tal unión se realizara era indispensable que se proyectara al movimiento popular en la tarea de construcción de un sistema social alternativo al sistema capitalista, es decir, con una ideología socialista. Ello debido a que las llamadas condiciones objetivas a nivel continental y nacional que hemos analizado lo exigían, del mismo modo que lo exigían las condiciones ideológicas que se heredaban tanto del debate de la última década como de la ideología propia de los partidos populares. La Unidad Popular aparece así como un movimiento de partidos, cuyo eje son los dos grandes partidos populares, Partido Socialista y Partido Comunista; pero en torno a los cuales se agrupan otros sectores radicalizados durante el experimento reformista.

Dos hechos nos aparecen particularmente significativos en esta alianza. En primer lugar, que más allá del programa electoral concreto que se presenta, está el sentido profundo de la proyección del movimiento popular hacia una transformación de las bases de la sociedad capitalista, a partir fundamentalmente de la alianza entre obreros y campesinos. En este sentido, el aporte cuantitativo de otros sectores de la población, en especial de los llamados "sectores medios", al movimiento electoral de la Unidad Popular, es ínfimo y por lo tanto, la alianza con esos sectores y su incorporación al proceso que iniciaría la Unidad Popular queda como un problema no resuelto en el momento de la contienda electoral, es decir, como un problema a resolver en el curso del proceso mismo. En segundo lugar, la estrategia del movimiento popular chileno en este siglo. En efecto, la legitimidad de la conducción del movimiento de masas por los partidos estriba en la capacidad de éstos de ofrecer alternativas históricas válidas para las masas, capaces de ser asumidas por ellas y de proyectarse a otros planos. En este sentido, es innegable que para las grandes masas populares chilenas el mecanismo electoral en 1970 poseía esta legitimidad y la "vía electoral" era una alternativa válida para ellas. No haber aceptado esto y haberse marginado de este proceso electoral, habría significado por parte de las organizaciones y vanguardias

políticas abandonar al movimiento de masas sin ofrecerle ninguna salida. La validez histórica de esa estrategia no dependía, entonces, de cuál fuera el resultado electoral. En efecto, si el movimiento encabezado por la Unidad Popular vencía en las elecciones, podía iniciar su proyecto histórico dentro de los marcos del sistema político formal que el fraccionamiento de la burguesía había permitido. Si era derrotada la Unidad Popular, su conducción quedaba en todo caso legitimada ante el movimiento de masas para ofrecerle nuevas alternativas en la lucha por la realización de su proyecto histórico. Apartándose de la alternativa o del camino que se ofrecía en 1970, las vanguardias y organizaciones políticas se apartaban también de la posibilidad de conducción legitimada del movimiento de masas frente a las nuevas alternativas históricas que se presentaran. Tanto es así, que quienes se marginaron del proceso electoral, tuvieron que reconocer su error y plegarse, de un modo u otro, al movimiento de masas conducido por la Unidad Popular.

De este modo, la respuesta chilena a la doble crisis latinoamericana aparece expresada y sintetizada en el encabezamiento del Programa Popular: "Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política, reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y del extranjero para iniciar la construcción del socialismo."

Pero para explicar los orígenes de la llamada "experiencia chilena", no basta con los dos elementos señalados, sino que es necesario referirse a un rasgo particular de la estructura social chilena, que la singulariza dentro de América Latina. Nos referimos al carácter del Estado. Se trata de un Estado que logra consolidarse tempranamente y que se convierte en el campo principal de luchas y alianzas de las fracciones de un núcleo oligárquico que tiene la capacidad y la flexibilidad para incorporar a él nuevos sectores que son promovidos y movilizados por el proceso de desarrollo. Este Estado —que como alguien ha anotado crece más por agregación que por transformación interna— desarrolla al extremo un conjunto de mecanismos de arbitraje de los conflictos entre fracciones de la clase dominante. Tanto es así que pareciera que en Chile se hubiera exacerbado, por ejemplo, la teoría de la división de los tres poderes. Si el juego de alianzas y transacciones del núcleo de poder se quiebra a fines del siglo pasado, esta ruptura se compensa con una nueva alianza entre la oligarquía y los intereses imperialistas, primero inglés, y luego norteamericano. Así el tipo de apropiación privada y extranjera del producto que genera el excedente económico, y la captación de este excedente a través del Estado, lo refuerza como el lugar privilegiado de alianza y luchas políticas. La capacidad económica del Estado, su in-

tervención creciente, coadyuvadas por la debilidad congénita de la burguesía chilena, permiten la viabilidad del esquema populista que caracteriza la evolución del país en este siglo y lo obligan a asumir un rol de regulador o de arbitraje que distorsiona u obnubila el carácter de la dominación. Un Estado como éste debe dar la apariencia de servir los intereses de todas clases y no sólo de una exclusivamente. Por ello está forzado a institucionalizar los conflictos y luchas de clases y a absorber de algún modo, por restrictivo que sea, las demandas de los grupos dominados; eso significa que el régimen estatal no puede evitar crear mecanismos legitimados de resolución de conflictos ampliando la participación en esos mecanismos de todos los sectores que puedan reclamarla con cierta capacidad de presión. Un ejemplo de ello es el sistema electoral.

Lo anterior nos permite entender más precisamente el peso de la "institucionalidad" en Chile y la gran transparencia que señalábamos se daba entre la institucionalidad y los procesos y movimientos sociales. Pero ahora nos interesa referirnos especialmente a dos consecuencias que se derivan del carácter del Estado descrito. En primer lugar, al amparo de estas características del Estado y en relación dialéctica con ella, se desarrolla en Chile una amplia, diversificada y compleja gama de "sectores medios", uno de cuyos rasgos fundamentales que interesa destacar para lo que expondremos más adelante es su connotación ideológica: se trata de "capas medias" con un grado de susceptibilidad a los elementos culturales e ideológicos mucho más fuerte que a otro tipo de estímulos frente a los cuales reaccionan vivamente estos sectores en otros contextos. Junto a la tradición de organización y lucha del proletariado, a la emergencia reciente del movimiento campesino inducido en la experiencia reformista y a la debilidad estructural de clases chilena. En segundo lugar, las características del Estado señaladas tienen una consecuencia fundamental en el carácter, rol e ideología de las Fuerzas Armadas en Chile. Las Fuerzas Armadas por su origen tienen como rol, además de la seguridad externa del país, el ser árbitros de los conflictos entre las diversas fracciones de la clase dominante. La existencia de un sistema abierto, con un variado conjunto de mecanismos arbitrales que se legitiman y prueban su eficacia a lo largo de la historia, unidos al monopolio de la fuerza, le dan a las Fuerzas Armadas el rol de árbitros potenciales o árbitros en última instancia. Su participación en la política del país, sin considerar el factor externo, de relación con los países vecinos principalmente, que la ausencia de peligros efectivos de guerra descarta, dependería en gran parte de la eficacia que mostrarán los mecanismos arbitrales del Estado chileno en la defensa del sistema institucional estable-

cido. Pero la situación es un tanto más compleja, por cuanto la ausencia de peligro de guerra y la existencia de mecanismos arbitrales eficientes y legítimos en el seno del Estado, al relegar a las Fuerzas Armadas a su rol de árbitros potenciales o de última instancia, las obligan a cultivar y desarrollar un rol profesional. Ahora bien, un rol profesional lleva aparejada una ideología que lo justifica y sustenta. En el caso chileno, fue la ideología constitucionalista, cuyo florecimiento obnubiló el verdadero rol de las Fuerzas Armadas a que hemos aludido. A esto deben agregarse otros tres elementos que permiten completar el cuadro: por un lado, el rol profesional con su estructura institucional jerárquica y autoritaria, —aspectos centrales a nuestro juicio— tiende a privilegiar el aspecto “grupo de presión”, por encima de los aspectos “pertenencia o composición de clase”, lo que lleva a los grupos dominantes en el Estado al tratamiento de las Fuerzas Armadas como un grupo de presión más, sin considerar su naturaleza política esencialmente diferente. Por otro lado, la ideología constitucionalista no debe entenderse exclusivamente en su aspecto mítico; ella permite el desarrollo en distintos niveles de sectores, aunque restringidos, con concepciones auténticamente constitucionalistas y secularizadas de progreso y desarrollo social. No obstante esto, es evidente que a diversos niveles la ideología constitucionalista tiene contrapesos ideológicos importantes en las doctrinas de la seguridad interna, la contrainsurgencia, etcétera, que los contactos profesionales de las Fuerzas Armadas con la fuerza militar norteamericana, hegemónica en la región, desarrollan. Los puntos anteriores permiten comprender por qué era posible para la Unidad Popular conquistar el Gobierno por la vía electoral buscando y obteniendo la neutralidad de las Fuerzas Armadas, en lo fundamental de su Alto Mando, cuya importancia es decisiva por las razones anotadas. Pero también permiten comprender la fragilidad de esa neutralidad en la medida que se quebrarán los mecanismos arbitrales frente a conflictos que amenazaran el *statu quo*, y la ideología constitucionalista cediera paso al verdadero rol de árbitro en última instancia que define históricamente a las Fuerzas Armadas chilenas.

Dentro del marco anteriormente descrito nos referiremos a lo que fue el proceso político de los tres últimos años dejando de lado el recuento del programa y de las realizaciones del Gobierno así como una descripción histórica de lo ocurrido, para centrarnos en cuatro aspectos que nos permitan una reflexión de conjunto: el significado del programa de la Unidad Popular, la conducción política del proceso, la estrategia de la oposición al Gobierno y el significado global de la experiencia de los

tres años. No cabe duda que aquí simplificaremos necesariamente, por razones de tiempo y espacio.

III. La problemática del Gobierno Popular y el significado del Programa

Este es el tercer punto en torno al que quisiéramos ordenar nuestras reflexiones.

Una muy breve síntesis de las formulaciones oficiales del Programa de la Unidad Popular permite establecer lo siguiente: la meta del proceso revolucionario es “una sociedad socialista en democracia, pluralismo y libertad”. Un proceso con estos fines se plantea como fase primera la liquidación de las bases de la sociedad capitalista, lo que implica que “la tarea fundamental que el Gobierno Popular tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios y de la oligarquía terrateniente”, para “iniciar la construcción del socialismo”. El elemento conductor de este proceso es la clase obrera, que genera progresivamente los elementos de su poder alternativo al de las clases dominantes o “enemigos fundamentales de la Revolución chilena”. Pero para poder derrotar a estos “enemigos fundamentales”, se trató de buscar el apoyo político más amplio de todas las otras capas de la población, es decir, se trata de “acumular fuerzas”; en este proceso de acumulación de fuerzas las medidas de democratización, bienestar social, redistribución, juegan un rol coadyuvante. Así, el programa busca ampliar un triple objetivo: establecer una amplia alianza de clases y grupos en torno a los partidos de la UP y a las organizaciones del proletariado, cuyos “intereses históricos” orientan el conjunto del proceso; romper así con “el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio”, e iniciar la “construcción del socialismo” a través de la creación de un Área de Propiedad Social, del Estado Popular y de una Nueva Cultura.

Así se formulaban los objetivos de la Unidad Popular al asumir Salvador Allende el Gobierno en 1970. Antes de intentar discernir la problemática y el significado reales de tales formulaciones, señalemos que de los tres elementos enunciados por el programa: Área de Propiedad Social, Estado Popular y Nueva Cultura, el único sobre el que existían consenso y referente claros era el Área de Propiedad Social. El Estado Popular permaneció siempre en la ambigüedad y, desde las primeras formulaciones que hacían residir su germen en una Asamblea Popular hasta las últimas y enconadas discusiones sobre el Poder Popular, la oscuridad del debate reflejó, por un lado, las profundas dificultades de la Unidad Popular para manejar el aparato del Estado y para expresar en este nivel al movimiento de masas que aumentaba su conciencia política, su grado de organización y su presión por participación; y, por otro

lado, la permanente ambigüedad en la definición de la fase política por la que se atravesaba. Volveremos sobre esto más adelante. En cuanto a la Nueva Cultura, fuera de referencias prematuras al "Hombre Nuevo", nunca fue definida en términos concretos y operativos como parte constitutiva del proceso político. El consenso sobre el Área de Propiedad Social y la confusión y ambigüedad sobre los otros dos aspectos, revelan en buena parte el carácter que había de tener la conducción política en el seno de la Unidad Popular y de ésta respecto al conjunto del movimiento social que encabezaba.

Más allá de las formulaciones oficiales y de las elaboraciones ideológicas en que éstas se insertaban, nos interesa tratar de discernir los elementos que configuran la problemática real que enfrentaba el Gobierno de la Unidad Popular y que permiten comprender el verdadero significado, a nuestro juicio, del programa.

Por un lado, están los partidos populares que integran en carácter hegemónico la alianza política denominada Unidad Popular. Son partidos que representan fundamentalmente los sectores del movimiento obrero más organizados y que poseen una ideología "proletaria" o "socialista". Ya hemos señalado que la connotación "socialista" de la ideología de la Unidad Popular juega un rol central en la estructuración de la Unidad Popular. Sin la "perspectiva revolucionaria y socialista" no habría habido alianza política ni programa común. Por otro lado, está el hecho de que este conjunto de partidos representativos del movimiento popular se plantea un conjunto de transformaciones fundamentales de la sociedad chilena, a partir de un elemento estratégico de un Estado que en su conjunto pertenece al orden político burgués, propio del esquema capitalista de desarrollo, cual es el Gobierno, en cuya conquista no se ha cristalizado la alianza con otros sectores de la población. El conjunto de transformaciones de que es portador este movimiento se expresa en lo fundamental en un proceso de democratización, es decir y en términos simples, en un proceso que tiende a hacer de la sociedad chilena una sociedad para el conjunto de sus habitantes y cuyos beneficios no se reduzcan como hasta entonces a una minoría inferior a un tercio de la población. Pero, como hemos anotado, este proceso de democratización no podía hacerse dentro de los marcos del desarrollo capitalista que había agotado sus posibilidades y sus esquemas políticos ni podía ser dirigido por los actores que habían fracasado históricamente. Se trataba, por lo tanto, de la irrupción del rol protagónico de los trabajadores, es decir, de la emergencia de lo que alguien ha llamado "el Chile popular". Proceso de democratización de la sociedad, fuera de los márgenes de la sociedad capitalista, dirigido por partidos representantes de los más importantes núcleos de la

clase trabajadora y a partir de un Gobierno inserto en un Estado al servicio del desarrollo capitalista, he ahí lo que a nuestro juicio constituía lo esencial de la fase que enfrentaba el Gobierno de la Unidad Popular.⁵

El carácter revolucionario de un proceso como éste queda claro en su propia definición. Pero lo que parece más significativo es la originalidad que adquiere este carácter revolucionario del proceso y que le da su sello. Dos nos parecen ser los rasgos distintivos más importantes. Por un lado, si uno examina la secuencia histórica de los procesos revolucionarios, o de transformación de las bases de sustentación de una sociedad, desde el punto de vista de un movimiento social, no puede dejar de recordar la formulación clásica de uno de los principales teóricos y políticos. En ella la secuencia, es a *grosso modo*, la siguiente: conquista del poder por las fuerzas revolucionarias, búsqueda del apoyo de las grandes mayorías y ejercicio efectivo del Gobierno. Ahora bien, en la situación chilena era esta secuencia clásica la que se invertía, por cuanto se trataba de ejercer el gobierno y a través de este ejercicio obtener el apoyo de las grandes mayorías, y con esta acumulación de fuerzas obtener el poder que permitiera la transformación básica de la sociedad. Este hecho le da un carácter especialmente conflictivo a la tarea de gobernar, por cuanto las diferentes medidas se enmarcan dentro de una ambivalencia fundamental: se plantean en términos de gestión y construcción de una sociedad y de lucha por el poder. La política económica adquiere así un rol estratégico y ella estará permanentemente marcada por esta ambivalencia. Este primer rasgo distintivo del proceso chileno le plantea un conjunto de problemas y dificultades inéditas y para las cuales otras experiencias revolucionarias no podían servir de referencia o de modelo ejemplificador.

Un segundo rasgo distintivo, y en directa relación con el anterior, es el juego permanente y dialéctico entre institucionalidad —en el sentido de Gobierno— y masas, que debía darse a lo largo de todo el proceso. No podía pensarse, por la naturaleza misma del esquema político seguido, en un poder alternativo constituido absolutamente al margen de la institucionalidad, en la medida que el movimiento popular había conquistado una parte de esa institucionalidad y ella era un elemento estratégico de su lucha. Tampoco podía pensarse en un proceso de transformación en que el movimiento de masas se plegara permanentemente a las exigencias de institucionalidad, es decir, del Gobierno. Lo esencial lo constituía esta relación dialéctica en que según las diversas circunstancias por las que atravesaba el proceso, era el Gobierno el que encauzaba al movimiento de masas, o alternativamente, éste el que remolcaba al Gobierno

y lo presionaba. Es evidente que el conjunto de transformaciones planteadas exigía la transformación de la propia institucionalidad; pero éste no podía concebirse como un puro asalto a la misma o como la creación al margen de ella de otra nueva institucionalidad, sino como un proceso de ruptura que se hacía combinadamente “desde dentro”, es decir, a través de los instrumentos conquistados en la misma institucionalidad, y “desde fuera”, a través de la lucha y movilización permanente del movimiento de masas.

Los elementos anteriores permiten configurar la problemática enfrentada por la Unidad Popular. Un planteamiento como éste nos distancia un tanto de otras concepciones sobre el carácter de esta problemática. Por un lado, no creemos que se pueda caracterizar el proceso chileno acudiendo a la tipificación de las vías y oponiendo la “vía pacífica” a la “vía armada”. Una distinción como ésta es demasiado vaga y no podrá dar cuenta de la especificidad del caso que se analiza. Tampoco creo que se pueda comprender la naturaleza del proceso chileno refiriéndolo a un enfrentamiento desde el inicio entre dos estrategias claramente configuradas, la reformista y la revolucionaria, o entre un Gobierno principalmente reformista y un movimiento de masas principalmente revolucionario. La existencia de estas dos estrategias o modelos, me parece más una construcción intelectual que un hecho real en la que se transforma a los modelos o estrategias en dos actores dotados de vida propia a los que se le imputan preconcebidamente los diversos acontecimientos y posiciones. Una concepción como ésta no permite captar el movimiento real y permanece necesariamente abstracta. Nos parece más adecuado pensar que en el seno de un proceso de carácter globalmente revolucionario, coexisten tendencias “reformistas” y “revolucionarias” —propias de todo movimiento social de transformación— las que tienden a predominar alternativamente según las circunstancias y las que son asumidas en distintos momentos por los diversos actores en presencia. El análisis concreto del modo como variaron los diversos grupos sus posiciones y estrategias muestra que es irreal el planteamiento de dos modelos alternativos claros y coherentes desde un primer momento.

Dentro del consenso básico en los elementos programáticos, la ambigüedad permanente por parte de la Unidad Popular en la caracterización de la fase política por la que se atravesaba, se debe menos a la coexistencia de modelos o estrategias opuestas que al fenómeno de la relativa autonomía de los aspectos ideológicos, que en el caso chileno alcanza grados extremos. Más adelante intentaremos plantear este problema en sus bases sociales. Por el momento, vale la pena detenerse un instante en esta autonomía del nivel ideológico que generó un profundo debate en el seno

de la Unidad Popular sobre el carácter del proceso y de la fase que se vivía. Para entender esta ambigüedad permanente y esta relativa oscuridad en la definición de la fase política es necesario agregar al factor ya anotado de la autonomía de los aspectos ideológicos, un rasgo propio de la ideología socialista o revolucionaria en la época actual. En efecto, al igual que la primera revolución capitalista no posee una ideología referida a modelos sociales existentes y quienes la conducen no tienen un conocimiento cabal del sentido del movimiento social en que están involucrados, el primer intento de construcción de una sociedad socialista se hace sin que existan modelos sociales previos a los cuales referir la experiencia. Pero esto no ocurre cuando han transcurrido casi las tres cuartas partes del siglo xx a más de cincuenta años de la primera revolución socialista y con experiencias diversas de procesos revolucionarios socialistas que se expresan en profundos debates ideológicos. Cualquier proceso revolucionario conducido por partidos del proletariado, con una ideología socialista como elemento básico de su alianza, debe hacer referencia a los diversos modelos y a este debate político-intelectual por el que atraviesa el movimiento revolucionario de este siglo. Pero es precisamente la permanente referencia a este patrimonio doctrinario lo que puede oscurecer el análisis de los procesos reales que se viven en un determinado momento histórico y distorsionar los fenómenos concretos que son referidos a experiencias, modelos y elaboraciones, muchas veces particulares e irreproducibles en otros contextos. Creemos que éste es un factor clave en la ambigüedad y oscuridad para definir el carácter concreto del proceso que se enfrentaba. Como alguien anotara lúcidamente, “en la izquierda chilena todos buscaban el Palacio de Invierno”, sin darse cuenta que en Chile no había Palacio de Invierno y que si lo hubiera habido, ése era el elemento que ya controlaba el movimiento popular. Si bien detrás de los debates en torno al carácter de la experiencia chilena había siempre problemas reales y concretos que enfrentar, éstos aparecían en general distorsionados por el fenómeno señalado.

A partir de los elementos presentados, que configuran a nuestro juicio la problemática que enfrentaba la Unidad Popular y el significado real de su programa, cualquier análisis de lo que fue el proceso en estos tres años debe detenerse en lo que fue la conducción política de la Unidad Popular, antes de entrar a considerar el carácter general del enfrentamiento político en el periodo.

IV. *La conducción política del proceso*

El cuarto punto de nuestro esquema de análisis se refiere a cómo la problemática definida anteriormente se expresa en la conducción del proceso por parte de la Unidad Popular.

Más allá del relativo consenso que existe en torno a los vacíos de la dirección política y a falta de una "conducción única", nos interesa destacar tres aspectos relevantes en esta materia.

En primer lugar, la ambigüedad en la definición operacional de la fase política a que hemos aludido se expresa en la permanente incapacidad por parte de la Unidad Popular para definir un adecuado tratamiento de un sector clave en el destino del proceso de transformación, las llamadas "capas o sectores medios". No debe olvidarse el rol estratégico que el mismo programa asignaba a los "sectores medios". En efecto, la naturaleza misma de la empresa política de la Unidad Popular definía una política claramente antimonopolista, expresada en aquella frase que "los enemigos fundamentales de la Revolución chilena son el capital imperialista extranjero, la burguesía monopólica y el latifundio". Frente a estos "enemigos fundamentales", se encontraban al proletariado y sus organizaciones políticas y entre ambos, una gran masa de la población, las "capas medias", que el proletariado debía agrupar en torno a él para "ser mayoría", aislar a los "enemigos fundamentales" y así derrotarlos. Notemos de paso, que este análisis es de un relativo esquematismo economicista y no toma en cuenta la articulación de las clases en los niveles políticos e ideológicos. Pero en todo caso, desde un comienzo la tarea de "ganar los sectores medios" adquiriría un carácter estratégico. Ahora bien, hemos dicho ya que en el triunfo electoral de la Unidad Popular en 1970 el aporte cuantitativo de éstos fue extremadamente poco significativo. Estudios al respecto muestran que el impresionante aumento electoral de la Unidad Popular en las elecciones de abril de 1971 tampoco se debió al voto de los "sectores medios", sino al de los grupos marginales del campo y la ciudad.⁶ Ello quiere decir que, en definitiva, nunca los "sectores medios" se plegaron al proceso dirigido por la Unidad Popular. Por el contrario, en la medida que la polarización política se agudizó, estos fueron un elemento clave en la lucha contra el Gobierno Popular. Los casos de los comerciantes, los transportistas y los Colegios Profesionales, todos ellos potenciales aliados en el esquema inicial, son elocuentes al respecto.

Si bien un fenómeno como éste es extremadamente complejo y requiere un análisis más exhaustivo, nos interesa explorar dos planos de explicación. Por un lado, debe señalarse que al hablar de "los sectores medios", se está denominando con un solo término una realidad extremadamente diversificada. Pertenecen a estos "sectores", los profesionales, los comerciantes, los pequeños y medianos industriales, los empleados públicos, etcétera. Los intereses de cada uno de estos grupos o categorías que constituyen los "sectores medios" son también muy distintos y a veces contrapuestos. Así, algunos de ellos eran favorables por la estructura monopólica

de la economía chilena en la medida que una parte del excedente económico les era transferido por diversos mecanismos, como es el caso de grupos profesionales, en tanto otros eran directamente afectados por esta estructura monopólica y estrangulados por ella. Así, no puede hablarse de los “sectores medios” como una clase homogénea con intereses propios y comunes. Pero hay un elemento que les da a estos sectores una cierta homogeneidad por encima de sus intereses específicos y diversos. Este es el elemento ideológico o de tipo cultural a que hemos hecho ya alusión, transmitido tanto por los sistemas educativos como por los sistemas de expresión y comunicación del sistema. La búsqueda de seguridad y estabilidad personales, la ideología de la movilidad social individual y el horror al descenso, la ideología de la “estabilidad y el orden” social, etcétera, son algunos de estos aspectos ideológicos, los que constituyen quizás los únicos rasgos comunes capaces de aglutinar a los diversos grupos que constituyen los sectores medios. Accionar sobre estos mecanismos ideológicos es una condición *sine qua non* si se quiere conseguir la adhesión de estos sectores a un proceso político. No basta, en ningún caso, con la manipulación de factores puramente económicos. Aquí residió, a nuestro juicio, el principal defecto en el tratamiento por parte de la Unidad Popular a los sectores medios. Se pensó que el problema de la alianza con ellos y de su incorporación al proceso era un puro problema de redistribución y aumento de sus ingresos. Es decir, dominó una concepción economicista y mecánica de las alianzas de clases en la que se entrega a la política económica toda la responsabilidad en ello, bajo el supuesto teórico que el apoyo político de un sector depende directa y exclusivamente del grado o de la magnitud del beneficio económico. Pero al no considerar los elementos ideológicos, en un proyecto social de ideología socialista que enfatizaba el rol histórico del proletariado, no se les otorgó a los “sectores medios” un “hueco”, un lugar, un papel que fuera perceptible y aceptable por ellos. El fracaso de esta concepción se ilustra dramáticamente en el caso de grupos como el de los comerciantes que en ningún periodo de la historia habían percibido ganancias tan elevadas y que, al mismo tiempo, en ningún periodo se habían organizado tan encarnizadamente contra un Gobierno.

Junto a la consideración del problema de los “sectores medios” en el plano ideológico, está la consideración del plano político en el que se articulan sus intereses globales. Si se quería obtener un apoyo de estos sectores —caracterizados por su gran volubilidad política— era indispensable algún tipo de arreglo o acuerdo con aquellas organizaciones políticas que en ese momento representaban o articulaban de algún modo los intereses de los “sectores medios”. En este caso se trataba de la Democracia

Cristiana. A nuestro juicio, si bien no hubo en la izquierda la suficiente claridad al respecto, la responsabilidad mayor cabe a la Democracia Cristiana. Los sectores de su clase política y de su tecnocracia más ligados al proceso reformista, obnubilados con la perspectiva del poder perdido, impusieron desde el inicio, en un fenómeno de ceguera histórica difícil de comprender racionalmente —excepto para aquellos grupos demócratas cristianos más directamente vinculados a la estrategia propia de la burguesía más recalcitrante—, una línea de oposición tenaz al nuevo Gobierno. Era en esos momentos que su clientela política —formada en gran parte por estos “sectores medios”— podían inclinarse a favor del Gobierno Popular. Más adelante, el propio proceso de radicalización política llevó a las bases y a la clientela DC a posiciones de extrema oposición que muchas veces desbordó a las propias directivas y en que ningún acuerdo con la Unidad Popular era ya posible. Pero el terreno ya había sido preparado por éstas en los primeros meses del Gobierno Popular y aun antes de su ascenso.

En los planos anteriores debe buscarse, a mi juicio, la explicación de por qué, en definitiva, el Gobierno Popular perdió la batalla por incorporar a su proyecto a los “sectores medios”. La alternativa al parecer, entonces, si se perdía esa batalla, era ni tan siquiera buscar su neutralización sino enfrentarlos directamente a través de una radicalización mayor del proceso, lo que se expresó a veces en el slogan “golpear de una vez a todos los patrones”. Nos parece que ésta era una falsa alternativa, por cuanto una decisión semejante, al dejar explícitamente aislado al movimiento popular y considerando la composición de clase mayoritaria de las Fuerzas Armadas y su relativa permeabilidad y nexos con los “sectores medios”, habría significado la intervención militar desde el inicio del proceso.

En segundo lugar hay, también, un dramático y profundo vacío en la conducción del proceso en lo que se refiere al tratamiento del problema militar y de la política respecto a las Fuerzas Armadas. Quizás la explicación radique en que la izquierda chilena cayó presa de la “trampa ideológica” de éstas. Ya hemos dicho que la ideología constitucionalista y profesionalizante, desarrollada por el rol que les había tocado cumplir en los últimos años, encubría su verdadero carácter de árbitro potencial en favor de los intereses del sistema establecido. La Unidad Popular había tomado esta ideología por su esencia y ser reales y había jugado la alternativa constitucionalista y profesionalizante como si ella definiera el rol verdadero de las Fuerzas Armadas. Es preciso aclarar que el desconocimiento de la naturaleza y disposición de las Fuerzas Armadas es general en Chile, siendo quizás el único ámbito, institución o grupo social sobre el que los

análisis intelectuales o políticos serios prácticamente, con contadísimas excepciones, no existen. Este desconocimiento y confusión alcanzaba a todos los sectores políticos del país. Cualquiera que sea la razón, la verdad es que no hubo nunca —por efecto de esta trampa ideológica— una política clara y coherente del conjunto de la Unidad Popular frente a las fuerzas militares. La preocupación personal del Presidente Allende por la neutralización política del Alto Mando fue adecuada en el primer periodo, pero ella resultó estéril e insuficiente cuando la polarización política había ya involucrado a las Fuerzas Armadas y la ideología constitucionalista había ido perdiendo vigencia en sectores importantes de ellas. Las alternativas de creación de un poder popular armado alternativo al de las Fuerzas Armadas, de infiltración del Ejército o de división de éste en caso de enfrentamiento, no fueron nunca alternativas serias y viables que fueran planteadas por la Unidad Popular. La primera porque, como alguien muy bien ha señalado, suponía resuelto el problema al concebir que podía armarse al pueblo a vista y presencia de quienes tienen el monopolio de las armas sin que intervinieran en contra. Los allanamientos ocurridos los meses antes del golpe militar, por parte de las Fuerzas Armadas, son una demostración de la falacia de esta alternativa. La segunda y tercera desconocían el carácter estrictamente jerárquico, autoritario y disciplinado de las Fuerzas Armadas, envuelto en una ideología profundamente celosa de su unidad e integridad. Como ejemplo de esto, en el caso del intento de golpe el 29 de junio conocido como el “tancazo”, las actuales autoridades militares lo han condenado no por su contenido, sino por no haber esperado la intervención institucional y haberse hecho al margen del Ejército como cuerpo. Cualquier posibilidad de infiltración o división era inmediatamente reprimida y en forma muchas veces brutal. La posibilidad de una división del Ejército en caso de enfrentamiento, aparecía a simple vista como la más probable; pero ella también se enfrentaba al hecho de su estructura institucional unido a la composición de sus estratos claves en mayoría opuestos al Gobierno, radicalizados por el proceso político y que habían eliminado progresivamente de su seno a los sectores o personas leales al Gobierno constitucional.

En tercer lugar, al analizar la conducción del proceso deben considerarse los errores y vacilaciones en el tratamiento de la movilización, incorporación y participación de las masas populares. Estas masas constituían la “base social” de la UP, junto a núcleos de pequeña burguesía radicalizada. Pero la composición social de esta base era bastante diversificada y a la diversidad social de la clase trabajadora y las masas populares —rasgo frecuentemente olvidado— correspondían en su seno intereses específicos inmediatos también distintos. La existencia de diversos partidos po-

pulares —en especial de los dos partidos ejes de la Unidad Popular, Partido Socialista y Partido Comunista, de cuya alianza Allende es la resultante— expresa de algún modo esta diversidad social. La construcción del Área de Propiedad Social como elemento clave del programa de la Unidad Popular, privilegiaba determinada conducción política, satisfacía intereses inmediatos e interpretaba históricamente sólo a ciertas fracciones del proletariado, aquellas que se ubicaban en determinados sectores productivos y poseían un nivel de organización y lucha social de larga trayectoria. Estas fracciones veían interpretados sus intereses en la conducción política dominante en el seno de la Unidad Popular en el periodo. Pero junto a ellas existían vastos sectores del proletariado y de masas urbanas y campesinas, que el proceso de polarización y radicalización de la sociedad entera, desencadenado a partir de 1970, había hecho crecer inmensa y bruscamente en organización y conciencia política, y que no tenían canales de participación adecuados ni expresaban sus intereses directos en la construcción del Área de Propiedad Social. Se trataba de sectores con menor trayectoria en las organizaciones tradicionales de clase, cuyo grado de apoyo al gobierno y cuyo ascenso en la conciencia de ser hombres libres y con derecho a influir en la marcha de la sociedad iba mucho más allá de los beneficios directos que hubieran recibido. Son los sectores que constituían una de las más típicas expresiones del “Chile popular”, cuyo grado de arraigo al sistema productivo moderno es más bien débil y cuyas reivindicaciones inmediatas enfatizan los problemas de la vida social no principalmente en cuanto productores, sino en cuanto pobladores de un territorio o consumidores. Pero en todo caso, el despertar de su conciencia política y organizativa, sus anhelos de participación y su impulso de movilización eran expresados por ellos más que en reivindicaciones inmediatas, en términos de poder o “poder popular” y en la creación, a veces espontánea, de organizaciones para defender su consumo amenazado por la especulación y el mercado negro (Juntas de Abastecimientos y Precios) y para integrar sus aspiraciones y luchas al nivel del territorio (Comandos Comunales) y sus demandas e intereses en el sector productivo (Cordones Industriales); estas organizaciones simbolizaban para ellos su “poder” y capacidad de presión. No siempre la conducción política dominante de la Unidad Popular determinada por el elemento central de la construcción del Área de Propiedad Social, integró y creó canales para la expresión de sus intereses, y cuando lo hizo fue siempre con retraso y sin una comprensión profunda de ellos. Y como se trataba de sectores muy heterogéneos, su expresión y conducción política —en los diversos partidos en que ella existió— fue siempre inorgánica y desarticulada. Este hecho, unido a los fenómenos de la autonomía del nivel ideológico y de los

caracteres propios de la ideología socialista a los que hemos aludido, fomentó consignas, posiciones y formulaciones ideológicas sin referencia a las posibilidades concretas que permitía el proceso político, y debates que oscurecían los problemas reales, dañaban el avance posible y dificultaban las soluciones concretas y viables al problema de la movilización e incorporación de estos sectores a la conducción del proceso.

Lo dicho hasta aquí sobre la diversidad de la base social de la Unidad Popular nos permite adelantar tentativamente dos conclusiones. En primer lugar que éste es el problema real que se esconde detrás del debate a menudo confuso y mal planteado sobre el Poder Popular. Y en segundo lugar, que lo dicho constituye una hipótesis más adecuada para plantear desde sus raíces sociales el fenómeno del llamado “ultraizquierdismo”, que la simple denominación descalificadora, que no da cuenta del problema real que lo origina y le da, por lo tanto, un tratamiento puramente represivo.

El conjunto de problemas analizados se reflejó en las profundas dificultades de la conducción política del proceso. Pero, a nuestro juicio, constituye una seria equivocación atribuir la derrota de la Unidad Popular a sus problemas de conducción. Una de nuestras afirmaciones básicas es que la caída de la Unidad Popular se explica más por los avances logrados en el proceso de transformación de la sociedad chilena que por la suma de sus errores. En otras palabras, se trata de un enfrentamiento con un enemigo de fuerzas superiores lo que provoca la derrota. Ello nos lleva a referirnos como quinto punto de esta exposición a la estrategia de la oposición al Gobierno y al carácter de la lucha política en el periodo.

V. La estrategia de la oposición y la lucha política

Es evidente que el carácter del gobierno, sus objetivos fundamentales, su base social, sus medidas y realizaciones, no podían ser aceptadas por los sectores directamente afectados y que estaban, en el curso del proceso de democratización no capitalista que hemos descrito, condenados a perder sus posiciones de dominación y privilegio. Para las fracciones de la burguesía monopólica y para el capitalismo de tipo imperialista, así como para sus representantes políticos, esto estaba claro desde antes que asumiera la Unidad Popular el Gobierno. Su objetivo central fue siempre el derrocamiento del Gobierno de Allende. El marco y el carácter de las luchas políticas del periodo están determinados, a nuestro juicio, entonces, por el modo como se organiza la estrategia de derrocamiento enfrentando al desarrollo de las medidas programáticas del Gobierno, y por el modo como éstas enfrentan a los sectores interesados en el derrocamiento.

Ya nos hemos referido en la Introducción a la doble estrategia seguida

por los EU en esta materia y nos remitimos en este momento a lo ahí anotado.

En lo que se refiere a la estrategia de la oposición interna la alternativa del derrocamiento exigía dos condiciones *sine qua non*. En primer lugar, su éxito dependía de la capacidad de la burguesía y sus representantes políticos de reencontrar la unidad perdida durante el periodo 1964-1970; sin esa unidad no podía enfrentarse con perspectivas positivas al Gobierno Popular. De ahí el intento permanente de los sectores que inicialmente estaban por el derrocamiento por arrastrar a su posición a la Democracia Cristiana como superestructura política y a la clientela política. Este intento se enfrenta en un primer periodo con una segunda estrategia en el seno de la oposición y predominante en la Democracia Cristiana, cual era no buscar directamente el derrocamiento del Gobierno —en algunos casos ni siquiera plantearse mediatamente este objetivo— sino su neutralización e impotencia, para plantearse como única alternativa válida de poder en el futuro. Esto no quiere decir que no existiera en la Democracia Cristiana desde un inicio un sector interesado en el derrocamiento inmediato del Gobierno, sino solamente que esta segunda estrategia era, en un primer periodo, dominante. Cualquiera unidad de la burguesía y su representación política pasaba por la solución de este problema de la doble estrategia y son las alternativas de la lucha política las que aportarán esta solución. En segundo lugar, se trataba de evitar a toda costa que el Gobierno llegara a ser mayoría en el país, y para ello los sectores interesados en el derrocamiento debían arrastrar tras de sí a los llamados “sectores medios” a los que nos hemos referido extensamente, y accionar a través de estos actores que poseían una legitimidad mayor que la gran burguesía. El punto de mira, entonces, para esta estrategia, es la inclinación a su favor de estos sectores, ya fuera a través de sus canales políticos, o ya fuera, principal y directamente, a través de sus organizaciones sociales, territoriales o gremiales. Cumplidas estas dos condiciones, era posible desnudar el verdadero carácter y rol de las Fuerzas Armadas a que hemos aludido con lo que ello implicaba de depuración de sus elementos leales al Gobierno legítimo.

El análisis anterior nos permite ubicar en su contacto adecuado los distintos momentos de la estrategia seguida por la oposición, los que no necesariamente se suceden en el tiempo sino que muchas veces se superponen. Es importante destacar que todos ellos se dan dentro de un marco institucional de irrestricto respeto de las libertades públicas por parte del Gobierno.

La primera etapa, luego de un repliegue inicial causado por el desconcierto ante la victoria de la Unidad Popular y de la pérdida de legi-

timidad por el atentado al general Schneider en octubre de 1970, se caracteriza por una oposición política tradicional a través de las organizaciones políticas de las diversas fracciones de la burguesía, dominada por la lucha por el liderazgo de la oposición entre el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, arrastrado consciente o inconscientemente por muchos de sus dirigentes a una estrategia que sería a la larga funcional a la tesis del derrocamiento. A este respecto debe insistirse en la diferenciación que existe entre la mayor parte de la clase política y la tecnocracia de la Democracia Cristiana, por un lado, obnubiladas por la conquista del poder, sin una adecuada comprensión del carácter “popular” del Gobierno y de la naturaleza que debían asumir el derrocamiento y el poder que se instaurara en virtud de tal derrocamiento, y su base social, que sigue durante todo el proceso el comportamiento general de los grupos medios de la sociedad a los cuales pertenece mayoritariamente. Un segundo momento se caracteriza por la utilización de todas las instituciones no controladas por la Unidad Popular contra el Gobierno para impedir el cumplimiento de su programa. Entre estas instituciones están aquellas del aparato estatal que no se plegaban al Gobierno, y también las instituciones sociales ajenas al Estado. Entre las instituciones estatales que adquieren un rol relevante en su oposición al Gobierno están el Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría. En lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, ellas permanecen impermeables en su conjunto a esta estrategia hasta marzo de 1974, cuando el fracaso de la tesis del “derrocamiento constitucional” se hace evidente en las elecciones parlamentarias, debido principalmente al peso del factor ideológico que hemos señalado y a la importante presencia, en distintos niveles, de elementos auténticamente constitucionalistas y leales al Gobierno legítimo. Entre las instituciones ajenas al Estado que no se plegaron oficialmente nunca a la estrategia de utilización de la oposición debe destacarse a la Iglesia. Si bien sectores importantes de su jerarquía y algunas actitudes parciales oficiales de ella favorecieron la estrategia de la oposición, es evidente que nunca hubo una inclinación institucional definida por ninguno de los bandos en pugna. Este rol de “testigo social activo” de la Iglesia requeriría un análisis mucho más profundo y pormenorizado que excede los límites de nuestro trabajo; bástenos por ahora con dejarlo señalado. El tercer momento, que al igual que el anterior estará presente en las dos etapas siguientes, se caracteriza por convertir la oposición al Gobierno en una tarea de masas en la que asumen un rol dominante los gremios de los sectores medios de la sociedad y que alcanza su culminación en el paro de octubre de 1972, y en el de agosto de 1973. Respecto al paro de octubre de 1972 vale la pena señalar su triple significado. El constituye, al

mismo tiempo, la primera escalada explícita y global de derrocamiento, el apogeo de la movilización popular en torno al Gobierno y la entrada definitiva en la escena política de las Fuerzas Armadas. A nuestro juicio la incorporación de las Fuerzas Armadas al Gobierno de Allende a raíz del paro de octubre, si bien tenía esta última consecuencia, era la única alternativa posible en ese momento, toda vez que el comportamiento militar durante el paro de octubre había sido favorable al Gobierno y que en sus niveles directivos predominaban aún los elementos constitucionalistas y leales al Gobierno legítimo. Si el precio que se pagaba era la explícita participación política de las Fuerzas Armadas, ese precio era inevitable y se pagaba en esos momentos en las mejores condiciones para el Gobierno. Es después y no en esta coyuntura que el tratamiento a las Fuerzas Armadas por parte de la Unidad Popular acusa serios vacíos y deficiencias, una de las cuales es no haber asumido las consecuencias de esta irrupción política que irá mermando en sus diversos niveles la ideología "constitucionalista". El cuarto momento, que se ubica sobre todo entre el paro de octubre y el 29 de junio de 1973, pero se hace especialmente intenso después de las elecciones de marzo, donde fracasó el intento de "derrocamiento constitucional", ve a la derecha chilena intentando dividir y ganar para sí al menos una fracción de dos sectores claves con los que no pudo contar en octubre para derrocar al Gobierno: la clase obrera, a través principalmente de la huelga de los mineros del cobre, y, sobre todo, las Fuerzas Armadas. El intento de división de las Fuerzas Armadas para provocar un enfrentamiento general que fuerce la caída del Gobierno, tiene su punto culminante en el "tancazo" del 29 de junio, cuya significación fundamental, por encima de sus ribetes grotescos, y contrariamente a la tesis más difundida en la Unidad Popular, es haber alertado a las Fuerzas Armadas sobre los riesgos y peligros de su posible división y haber cancelado, entonces, toda posibilidad de enfrentamiento masivo tipo guerra civil. A esta altura, la estrategia de neutralizar o impedir políticamente el avance del programa del Gobierno ha sido desechada por la mayoría de la oposición; el Gobierno, aun cuando sus dificultades de conducir y administrar el país son cada vez más enormes, no puede renunciar a esa posibilidad por cuanto en ella reside su única arma de defensa, a lo menos teóricamente, y, sobre todo, porque ello significaría renunciar a su unidad política y social; los sectores medios y la mayor parte de las instituciones sociales, excepto la Iglesia, intentan nuevamente y con relativo éxito paralizar el país; la Democracia Cristiana persiste en ignorar el carácter popular del Gobierno y es encabezada por los sectores más favorables a su derrocamiento, en la ilusoria esperanza de que les sería mediatamente favorable, sin percibir el carácter que tal derroca-

miento debía tener. Se entra entonces en el momento decisivo, en que la estrategia de derrocamiento juega al “golpe institucional”, es decir, de las Fuerzas Armadas en su conjunto. En una situación de abierta politización, los sectores “golpistas” de ellas logran consolidarse y eliminar, sea institucionalmente, sea en forma de represión brutal, los elementos progresistas y de oposición a un golpe militar. Ello, unido a la anulación parcial de los mecanismos arbitrales del Estado, a la unidad interna que su ideología había fomentado y a su estructura jerárquica, permite a las Fuerzas Armadas hacer efectivo en el golpe del 11 de septiembre su verdadero rol de árbitros potenciales a favor del sistema establecido y de sus clases dominantes.

Conviene señalar que el golpe militar “institucional” de las Fuerzas Armadas en su conjunto era la alternativa más favorable de derrocamiento del Gobierno Popular para la gran burguesía y los “intereses” “imperialistas”, por cuanto evitaba el peligro de una guerra civil con sus riesgos necesarios para la misma burguesía y por cuanto creaba las mejores condiciones políticas e institucionales para iniciar de inmediato la reconstrucción de una sociedad capitalista en una situación que la acumulación de capital por sobreexplotación del trabajo sería extremadamente favorable. Cualesquiera que sean las contradicciones futuras, el régimen militar, aún en principio, era la más segura garantía inicial que el proceso de explotación y desarrollo capitalista, en su fase de despegue al menos, podría realizarse sin interferencias democráticas de índole extraña a la lógica del sistema.

Para comprender el carácter del golpe militar y del régimen que se instaura, es necesario antes sintetizar el significado del proceso social de estos tres años. Es lo que haremos al abordar el sexto punto de nuestro esquema.

VI. *El significado global del proceso.*

No cabe aquí un análisis y un recuento de las “realizaciones del Gobierno” durante el periodo, entre las cuales las más significativas son por un lado, aquellas tendientes a eliminar el capital monopolístico nacional y extranjero y a liquidar el latifundio y, por otro, aquellas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las masas populares y a lograr su incorporación y plena participación en los diversos niveles de la vida social.⁷ Más bien lo que nos interesa es destacar cuáles son los aspectos esenciales de la sociedad chilena que fueron transformados en estos años. Se trata de saber en qué aspectos fundamentales era distinta la sociedad chilena a raíz del proceso político de la Unidad Popular, en relación a la sociedad de 1970.

Una evaluación global de la experiencia de estos tres años señala, a

nuestro juicio, dos grandes dimensiones de las profundas transformaciones operadas y que hacen del Chile de 1973 una sociedad cualitativamente distinta a la de 1970.

En primer lugar, la remoción de las bases fundamentales de la sociedad de explotación construida desde más de un siglo. A fines de la experiencia de la Unidad Popular el sistema capitalista chileno era un capitalismo en plena descomposición con los síntomas típicos de ella, tales como el desabastecimiento, la especulación, el mercado negro, la alta inflación, etcétera, y con un hondo resquebrajamiento de su estructura institucional. Prácticamente se habían liquidado en gran parte sus bases de sustentación y se estaba a las puertas de la construcción de un sistema alternativo con inmensas posibilidades y perspectivas de una plena vigencia del poder organizado de las masas populares. Pero dicho sistema social alternativo no había sido construido y la encarnizada lucha política parecía haberle restado fuerzas al Gobierno para dirigir y administrar este proceso de construcción. La situación de "desgobierno" era también un corolario de esta descomposición del sistema capitalista vigente hasta 1970.

En segundo lugar, el desarrollo de los más altos niveles de conciencia individual y colectiva de las masas populares y del proletariado. Se trataba fundamentalmente de una conciencia igualitaria, profundamente contraria a cualquier atisbo o resabio de privilegio, que se expresaba en términos de unidad y poder social y político, y que excedía inmensamente el mejoramiento objetivo que se obtuvo en las condiciones de vida. Era la emergencia y plena vigencia del "Chile popular" en que por primera vez faltaban los mecanismos represivos del sistema contra las masas populares. El corolario de este aspecto era la existencia de un sólido y alto nivel de organización popular.

Éstos nos parecen ser los dos aspectos centrales que caracterizan el conjunto del proceso de estos tres años y que constituyen el doble significado de la experiencia de la Unidad Popular.

Es evidente que ambos aspectos varían en su grado de reversibilidad. Los dos meses de gobierno militar muestran que la destrucción de las bases de la sociedad capitalista dependiente no era irreversible y hoy se asiste al proceso de reconstrucción a toda marcha de este sistema, uno de cuyos elementos más llamativos es la devolución de las empresas del área social, de predios agrícolas expropiados incluso en la administración demócratacristiana y la renegociación con las empresas norteamericanas del cobre. El proceso de organización popular también ha sido detenido y la mayor parte de esas organizaciones, sobre todo las más recientes, pero incluso algunas importantes de larga tradición, han sido desmanteladas. Es en el aspecto conciencia individual y colectiva donde el fenómeno de

reversión parece ser extremadamente difícil, y donde pareciera residir el logro más definitivo alcanzado por el proceso político de estos años.

El doble significado de la experiencia de la Unidad Popular nos permite tanto un juicio global del proceso y su valor, como una mejor comprensión del carácter del gobierno militar que se instaura el 11 de septiembre de 1973. Y éste será, precisamente el último punto de nuestro análisis.

VII. *El carácter del gobierno militar*

En este punto nuestras observaciones serán necesariamente provisionarias, breves y esquemáticas, por cuanto falta aún la distancia necesaria para un análisis más en profundidad.

Ya hemos señalado que el golpe militar de las Fuerzas Armadas en su conjunto era la alternativa más favorable para la gran burguesía nacional.

Nos limitaremos ahora a indicar algunos rasgos que nos permitan entender el significado de estos primeros meses de gobierno militar.

Es evidente que derrocar al Gobierno de Allende en Chile no era lo mismo que derrocar militarmente a cualquier gobierno democrático o hasta "progresista" de América Latina. La experiencia de la Unidad Popular tenía raíces profundas en toda la historia social chilena y significaba una culminación y un salto cualitativo en un proceso de creciente democratización. Terminar con ella implicaba necesariamente arrasar con las raíces mismas del desarrollo sociopolítico chileno y poner fin no a un periodo de tres años sino de varios decenios. El primer acto del gobierno militar, el bombardeo de la Moneda, es un símbolo dramático de esta realidad. Es aquí donde residió una de las equivocaciones más graves de la Democracia Crisitana, al concebir la posibilidad de un golpe militar como un simple paréntesis en la vida institucional del país, después del cual ella sería la única alternativa de poder posible. Se desconocían así no sólo el carácter y el verdadero significado del Gobierno de la Unidad Popular, sino también ciertas constantes universales de la historia de las revoluciones y contrarrevoluciones.

Porque si aceptamos el carácter del Gobierno de la Unidad Popular y el doble significado del proceso social desarrollado entre 1970 y 1973, cualquier sector o grupo que derrocara al Gobierno de Allende, más allá de sus primeras intenciones, estaba obligado a dos tareas inmediatas: a iniciar, por un lado, a toda marcha la tarea de reconstrucción del capitalismo, so riesgo de caos económico total, apoyándose para ello necesariamente en la dirección económica de los sectores capitalistas más fuertes y, por otro lado, a reprimir y liquidar violentamente a los sectores cuya con-

ciencia y organización políticas eran un peligro inmediato y permanente para la subsistencia del nuevo régimen.

Así, en la lógica anterior, las medidas tomadas durante estos meses se orientan a tres fines fundamentales:

1. Restablecimiento acelerado del sistema capitalista en descomposición. Se trata del intento más serio en Chile de construir un sistema capitalista vinculado a las tendencias actuales del capitalismo imperialista de las corporaciones multinacionales y liberado de todas las restricciones que en los regímenes capitalistas modernos habían logrado introducir los mecanismos y sistemas de la democracia formal y las reivindicaciones de la clase obrera.

2. Represión masiva, directa y física de toda forma colectiva o individual de crítica al sistema. Es probable que este tipo de represión indiscriminada ceda paso poco a poco —a medida que se afinen los sistemas de inteligencia y seguridad— a una represión tan fuerte como ésta, pero selectiva y oculta, dirigida a los puntos claves de reivindicación contra el sistema.

A la represión directa y física, debe agregarse la “represión institucionalizada”, que tiende a integrar el sistema e impedir cualquier forma de libre expresión. La política de censura de prensa y de intervención en las Universidades se ubica dentro de este tipo de represión. Cabe señalar que esta represión institucionalizada tiene como blanco principalmente a la Democracia Cristiana y no a los sectores de izquierda.

3. Construcción de un “proyecto ideológico” —de contenido aún confuso en el que resaltan los elementos de nacionalismo exacerbado, despolitización y antimarxismo—, que solvente culturalmente el proyecto de dominación. La debilidad política del régimen militar le obliga a buscar su legitimación en un proyecto cultural que busca, entre otras cosas, la internalización de la “normalidad institucional” por parte de la población. Esto se logra a través de la manipulación de los aparatos y símbolos de comunicación y expresión, de la indoctrinación de las nuevas generaciones por medio del sistema educacional y del control de todas las organizaciones sociales en un intento aún incierto de “corporizar” los movimientos de masas.

La racionalidad del régimen así descrita, se da, sin embargo, en un clima de irracionalidad tal que a veces puede pensarse, en el caso chileno, en la existencia de una “aberración histórica” inexplicable, en la que el país parece invadido y ocupado militarmente por una casta extraña que entra en contradicciones con los sectores más variados de la población, pero que mantiene el control total del poder.

Porque, dentro de un modelo político que aparece como ambiguo, pro-

yectado hacia el futuro y sometido a contradicciones entre diversas fracciones que pugnan por la hegemonía y que se expresan hoy en la coexistencia de dos estilos en el seno de una misma política, uno más abiertamente de tipo fascista, represivo y autoritario y otro igualmente represivo en los hechos, pero más demagógico, paternalista y, en cierto modo, populista; la tendencia inequívoca es a la concentración de todos los poderes sociales en el grupo gobernante y a la implantación de un conjunto de mecanismos destinados a perpetuar indefinidamente el nuevo sistema de dominación.

Es evidente que al régimen se le plantean y se le plantearán un conjunto de dilemas en relación a su proyecto político. Entre las exigencias de un sistema económico irrestricto de libre empresa y los requerimientos de la concentración del poder estatal exigidos por el tipo de dominación política; entre la tendencia a la autonomización del poder militar y exigencias de alianzas políticas con la burguesía; entre la necesidad de constituir una base social de apoyo político, lo que se ha llamado un “movimiento cívico militar”, y los efectos de una política económica que aliena el apoyo de los más amplios sectores de las capas medias; por citar sólo algunos de estos dilemas.

Cualquiera sea la solución que se dé a los problemas anteriores, lo que nos parece importante destacar es que un nuevo proyecto social surge ante nosotros, que rompe con todo lo que Chile conocía hasta ahora. Ello exige una profunda revisión del esquema político.

En lo que se refiere a la Democracia Cristiana, más allá de la existencia de una superestructura política, aparece con una clase política profundamente dividida: con una tecnocracia fácilmente cooptable por el poder militar y con una base social cuya masa popular sufre las consecuencias del régimen con un rigor tal que difícilmente podrá ser captada por él, aun cuando su superestructura política lo apoyara, y cuyos “sectores medios” serán disputados por el liderazgo político del poder militar. Desde un punto de vista sociológico, no puede decirse que la Democracia Cristiana haya desaparecido, pero sí que su viabilidad política es hoy extremadamente difícil.

En lo que toca al movimiento revolucionario, su capital principal es, sin duda, la unidad que le legara fundamentalmente la muerte de Allende. No es posible hoy plantear las alternativas futuras ni nos corresponde hacerlo. Dos observaciones al pasar, nos parecen sin embargo pertinentes. En primer lugar, la necesidad de asumir la ruptura profunda en la historia sociopolítica chilena producida por el golpe militar; ruptura que implica necesariamente alguna consecuencia en la relación tradicional entre partidos y movimiento social a que hemos aludido. Para plantearse ade-

cuadramente la nueva problemática de la Revolución chilena no basta, entonces, referirse a modelos estratégicos posibles y alternativos, sino que es condición básica replantear sus actores políticos, por un lado, y, por otro, referirse especialmente a lo que ocurra en el seno del movimiento popular, hoy día parcialmente sofocado, más que a las transacciones de las estructuras políticas. En segundo lugar, y con esto volvemos al punto de partida de esta exposición, cualquier análisis del proyecto social en marcha en Chile y cualquier elaboración por parte del movimiento revolucionario de un contraproyecto, debe ubicar a ambos en el contexto latinoamericano. Si la experiencia chilena iniciada en 1970 adquiría toda su significación en ese contexto y era ininteligible fuera de él, su trágico final y el proyecto de dominación que hoy elaboran las clases y grupos militares en el poder, adquieren también su significación dentro de un contexto continental en el que los esquemas de gobiernos autoritarios y antipopulares parecieran dominar la escena del futuro.

Nota final

Una última reflexión personal, un tanto al margen del tono y carácter de lo que hemos expuesto. Al recorrer nuestro esquema de análisis pareciera traslucirse una cierta concepción semejante a la de una tragedia griega en que el personaje central camina inexorablemente al cumplimiento de un destino fatal, ya escrito de una vez para siempre. Más allá del necesario esfuerzo analítico, confieso que esta imagen no me es totalmente ajena. Porque como se ha tratado de explicar aquí, el intento de 1970 tenía validez histórica y su desafío no podía dejar de asumirse; porque, una vez iniciada la experiencia, tengo grandes dudas que los acontecimientos hubieran podido desarrollarse de otro modo; y porque estoy convencido que la derrota de la Unidad Popular no se debió a su suma de errores remediables, sino a la existencia de enemigos inmensamente superiores. Quizás todo ello pudo ser predicho en 1970 o antes y quizás algunos lo hicieron. Pero eso no tiene a mi juicio mayor importancia, porque la diferencia con la imagen de la tragedia griega, estriba en que la historia de los pueblos no está nunca escrita por ningún profeta, por muy lúcido que éste sea, sino que debe necesariamente ser escrita por ellos mismos, aun cuando haya quienes al final del camino reivindicuen su verdad. No puede olvidarse tampoco que, en la historia de la humanidad son muy escasas las revoluciones sociales liberadoras que han triunfado y miles los intentos fracasados, y sin embargo, todos ellos tienen un valor y un sentido para la vida y el destino tanto de los propios pueblos que los vivieron como para el conjunto del movimiento hacia la liberación. Si bien todo esto corresponde a afirmaciones e intuiciones que

parecen escapar del terreno científico, pensamos que es tarea científica e intelectual prioritaria para quienes pudieron vivir y sobrevivir a esas experiencias históricas, desentrañar su sentido y valor y proyectarlos al futuro.

¹ No tiene sentido una bibliografía completa sobre el tema de nuestra exposición, por el carácter extenso y exhaustivo que ella debiera tener. Nos limitaremos, por un lado, a señalar que muchos de los trabajos de diversos investigadores y analistas, en los que hemos encontrado ideas fructíferas para nuestras reflexiones, permanecen en calidad de documentos de Seminarios, Conferencias o discusiones preliminar, artículos periodísticos o proyectos de investigación, por lo que no es posible citarlos. Por otro lado, algunas ideas que nos han servido de inspiración para el tratamiento de ciertos puntos aparecen especialmente en Aníbal Pinto: *Desarrollo Económico y Relaciones Sociales en Chile*. (En *Chile, Una Economía Dificil*. Fondo de Cultura Económica, 1964); Kalki Glauser: "Crisis Social del Capitalismo en Chile". (En *Revista Mensaje*, septiembre-octubre, 1971); Sergio Ramos: *Chile, ¿Una Economía en Transición?* (Editorial Casa de las Américas, Cuba, 1972); Varios autores: *Revolución y Legalidad, Problemas del Estado y del Derecho en Chile* (En Cuadernos de la Realidad Nacional, número especial, diciembre, 1972); Echeverría, Castillo y Larraín: *Estado, Masas y Poder en Chile* (En Cuadernos de la Realidad Nacional, No. 16). En relación a datos estructurales del país y su economía una buena síntesis de divulgación de las fuentes oficiales nacionales e internacionales puede encontrarse en el libro de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN): *Chile, un País Andino del Pacífico Sur* (Editorial Universitaria, 1972).

² Algunos indicadores al respecto, más allá de los ya suficientemente conocidos de aumento de la deuda externa (de 392 millones de dólares en 1958 a 1 500 millones de dólares en 1966 y 4 100 millones de dólares en 1971, atribuibles a la administración Frei) y de los pagos por servicios tecnológicos (de 7 millones en 1962 a casi 17 millones de dólares en 1968), son los siguientes: El porcentaje de inversión norteamericana en la industria manufacturera respecto a la inversión total en la economía chilena, que en 1953 era del 3%, aumenta a 7,8% en 1964 y a 14% en 1968, correspondiéndole a este sector el 41,1% del total de nuevas inversiones norteamericanas directas desde 1959 a 1969. Como señala un estudio: "Si a esto se suman los préstamos, las licencias y patentes y otros mecanismos indirectos, se tendría el cuadro que poco a poco va llevando al control por parte del centro imperialista no sólo ya del enclave minero exportador, sino del corazón mismo de la industria manufacturera" (Glauser, art. cit.). En 1968 el capital privado extranjero controlaba el 17% del capital pagado de todo el sector industrial; dicho porcentaje era en la práctica controlado por menos del 1% de los accionistas. (A esa fecha el Estado sólo poseía el 13% del capital del sector industrial). De las 160 sociedades anónimas grandes en 1968 en términos de activo, 82 registran participación extranjera. En 37 de las 160 la participación sube del 50% y en 54 la participación es superior al 33%, porcentaje que basta para controlar la empresa. El capital extranjero se sitúa en las áreas de más rápido crecimiento, cuyo desarrollo ha sido muchas veces iniciado o alentado por el Gobierno, en los mercados de carácter monopólico u oligopólico y en actividades cuya complejidad tecnológica no justificaría su presencia pero a la que el Estado dedica sumas cuantiosas. La conclusión de estos estudios señala: "El sistema de propiedad privada de las empresas líderes en los sectores más dinámicos, las ligazones de los empresarios privados nacionales con los extranjeros y la simple acción controladora y reguladora del Estado, conforman un sistema cuyo comportamiento contribuye a acentuar la dependencia y la falta de iniciativa nacional y conduce a un desarrollo distorsionado que no satisface las necesidades de la mayoría y no genera la ocupación ni el desarrollo suficientes" (Sergio Bitar: "La inversión extranjera en la industria chilena", en *El Trimestre Económico*, octubre-diciembre, 1971; también: "La inversión extranjera en la industria chilena" de L. Pacheco, Escuela de Ingeniería, Universidad de Chile, 1970, y "Comportamiento de las principales empresas extranjeras industriales acogidas al DFL", No. 258, CORFO, División de Planificación Industrial, Santiago, 1970.)

³ Algunos datos de la concentración económica en el periodo democratacristiano son los siguientes: en 1967, de 35 000 empresas industriales en todo el país, había unas 150 empresas monopólicas que dominaban los mercados, concentraban el crédito público y controlaban a sus proveedores. Más de la mitad de las 144 mayores empresas eran dominadas por menos de diez accionistas que concentraban entre el 90 y 100% del capital. Un 2,7% de los deudores acumulaban un 58,1% del crédito. 37 deudores particulares concentraban más del 25% del crédito total. En 1970, 284 sociedades anónimas que representan un 17% del total de las sociedades anónimas, poseían el 78% de los activos existentes en el total de las sociedades anónimas. De las 35 000 empresas fabriles el 1% entregaban más del 60% de la producción. En el sector del comercio mayorista, en 1967 el 0,5% del total de las firmas distribuidoras más grandes (12 firmas) efectuaron el 44% de las ventas; en el comercio minorista el 4,6% de las firmas realizaba el 26% de las ventas totales. En el sector bancario, en 1965, 60 accionistas poseían el 19% de las acciones bancarias totales y 200 accionistas el 34% de ellas. En lo que se refiere a concentración del ingreso, un 2% de las familias en 1970 controlaban el 46% del ingreso nacional, mientras que 60% de las familias percibían un 17% de los ingresos del país. (Datos extraídos de informes oficiales, sintetizados en ODEPLAN, *op. cit.* Ver también de Oscar G. Garretón y J. Cisternas: "Algunas características del proceso de toma de decisiones en la gran empresa: la dinámica", Santiago, 1966, y del mismo autor, "Concentración monopólica en Chile: participación del Estado y los trabajadores en la gestión económica").

⁴ Por ejemplo, el índice de mortalidad infantil que figuraba entre los más altos del mundo, la alta proporción de desnutrición infantil, que llegaba a más del 50% entre los menores de 15 años; situación de subconsumo en alrededor del 30% de las familias de trabajadores, con ingresos inferiores a un sueldo vital y del 60% con rentas inferiores a dos vitales; elevado porcentaje de cesantía crónica, que en 1970 alcanzó en Santiago (la tercera parte de la población del país) a un 8,3% de la población activa; un déficit de más de medio millón de viviendas y condiciones deficientes en cuanto alcantarillado, agua potable, luz, salubridad, etc.; grandes deficiencias en materias de atención de salud y educación; producción agropecuaria crónica y progresivamente deficitaria; bajo ritmo de crecimiento del producto nacional, con un promedio del 3,7% anual en el periodo 1966-1970.

⁵ En este sentido nos parece acertada la siguiente definición de Allende en su Primer Mensaje al Congreso Nacional (1971): "El combate sostenido para abrir el camino de la democracia económica y conquistar las libertades sociales es nuestra contribución mayor al desarrollo del régimen democrático. Llevarlo a cabo simultáneamente con la defensa de las libertades públicas e individuales y el desarrollo del principio de legalidad, es el desafío histórico que todos los chilenos estamos enfrentando."

⁶ Ver Urs Muller-Planteberg: "La voz de las cifras. Un análisis de las elecciones en Chile entre 1957 y 1971". (En Cuadernos de la Realidad Nacional, No. 14, octubre, 1972).

⁷ Entre las primeras se cuentan la nacionalización de las riquezas básicas, de los bancos, la incorporación de más de 300 empresas al Área de Propiedad Social en distintos status jurídicos, la expropiación hasta julio de 1972, de 3 347 predios agrícolas, etcétera.

Respecto al mejoramiento de las condiciones de vida de las masas populares, un indicador relevante es el aumento de la participación de los asalariados en el Producto Nacional en más del 10%, así como la disminución brusca de la desocupación a una tasa de poco más del 3%, el aumento de las matrículas en todos los niveles educacionales, la disminución drástica de la mortalidad infantil y un ritmo de construcción de 50 000 viviendas por año.

Respecto a la participación popular institucionalizada, vale la pena señalar la creación de Consejos de Administración y Comités de Vigilancia en las industrias, la creación de las Juntas de Abastecimiento y Precios. Comandos Comunales y Cordones Industriales. Junto a ellos, la creación de organismos sectoriales como los Consejos Locales de Salud y los Consejos Educativos en los diversos niveles del sistema. En el sector agrario, junto a los Consejos Comunales Cam-

pesinos constituidos formalmente y funcionando realmente en 100 comunas del país, hay que destacar que el porcentaje de campesinos sindicalizados que era en 1970 un 39.1% aumenta a 69.8%.

Los datos anteriores no tienen otra intención que contribuir a una ilustración mínima, sin que podamos entrar aquí a detallarlos, analizarlos y apreciarlos en sus reales dimensiones.

ERRATA: El título completo del trabajo de Garretón y Cisternas es: "Algunas características del proceso de toma de decisiones en la gran empresa: la dinámica de la concentración industrial". Y la fuente del segundo trabajo citado es Cuadernos de la Realidad Nacional, No. 7, marzo, 1971.